

Fernando Anaya Garcia
Juan Manuel Caloto Carpintero
PROCURADORES DE LOS TRIBUNALES

Sentencia
ICA N° 25 Madrid

CARLOS PEÑA RECH, ANTONIO ÑUDI TORNERO
(URBE)

Cliente:	AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA TORRE (GUADALAJARA)	Ref.:	
Contrario:	AYUNTAMIENTO MECO		
Organo:	JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 25 MADRID		
Procedimiento:	RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N º 81-12		
M/Ref.:	F-2012/4998		
Letrado	CARLOS PEÑA RECH, ANTONIO ÑUDI TORNERO (URBE)	Ref.:	

MADRID , 18/03/2015

Adjunto le remito el último trámite procesal en el asunto arriba referenciado.

03/03/2015 SENTENCIA 4998 F 81-12 NOT LEXNET 03-03-15. STC



Mensaje LexNet - Notificación

Mensaje

IdLexNet	201510065411083
Asunto	Sentencia desestimatoria (F. Resolución 24/02/2015)
Remitente	Órgano Judicial JDO. CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 25 de Madrid, Madrid [2807945025] Tipo de órgano JDO. DE LO CONTENCIOSO
Destinatarios	ANAYA GARCIA, FERNANDO [1193] Colegio de Procuradores Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid
Fecha-hora envío	03/03/2015 14:33
Adjuntos	1080950_2015_I_27801027.RTF (Principal) Hash del Documento: d9241fcc99797d34cf1d7699c26e45bce292a486
Datos del mensaje	Tipo procedimiento ORD Nº procedimiento 0000081/2012 Detalle de acontecimiento NOTIFICACION NIG 2807945320120023161

Historia del mensaje

Fecha-hora	Emisor de acción	Acción	Destinatario de acción
03/03/2015 16:25	ANAYA GARCIA, FERNANDO [1193]-Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid	LO RECOGE	
03/03/2015 15:04	Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid (Madrid)	LO REPARTE A	ANAYA GARCIA, FERNANDO [1193]-Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid

(*) Todas las horas referidas por LexNet son de ámbito Peninsular.

Signature
Not Verified
LEXNET

**Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 25 de Madrid**

C/ Gran Vía, 19 - 28013

45029710

NIG: 28.079.45.3-2012/0023161



(01) 30278010274

Procedimiento Ordinario 81/2012 GRUPO 2

Demandante/s: AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA TORRE

(GUADALAJARA)

PROCURADOR D./Dña. FERNANDO ANAYA GARCIA

Demandado/s: AYUNTAMIENTO DE MECO

LETRADO D./Dña. JUAN CARLOS ALBERT GOMEZ, PLAZA: de la Constitución,

C.P.:28880 Meco (Madrid)

SENTENCIA Nº 92/2015

En Madrid, a 24 de febrero de 2015.

Visto por mí José Luis Sánchez-Crespo Benítez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 25 de Madrid, el recurso seguido por los trámites del Procedimiento Ordinario con el nº 81/12 a instancia del **AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA TORRE**, representado por el Procurador de los Tribunales Dº Fernando Anaya García y defendido por el Letrado D. Antonio Nudi Tornero, contra el **AYUNTAMIENTO DE MECO**, representado y defendido por el Letrado D. Juan Carlos Albert Gómez, y

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Se ha interpuesto por el **AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA TORRE**, recurso contencioso-administrativo “frente a la vía de hecho realizada por el citado Ayuntamiento de Meco, respecto al cierre al tráfico rodado del denominado CAMINO DE VILLANUEVA DE LA TORRE A MECO , que comunica ambas poblaciones y frente a la inactividad de dicha administración en orden a la reapertura del Tráfico rodado del citado camino

compartido por ambos Municipios , revocando , derogando , cesando o modificando la actuación municipal que motivó el impedimento físico del tránsito de vehículos por el mismo”.

Segundo.- Se acordó seguir dicho recurso por los trámites del procedimiento ordinario, a cuyo efecto se ordenó la remisión del expediente administrativo y el emplazamiento de las personas interesadas.

Tercero.- Remitido dicho expediente, se dicte sentencia estimatoria del recurso interpuesto contra el Ayuntamiento de Meco (Madrid), “frente a la vía de hecho realizada por el citado Ayuntamiento de Meco, respecto al cierre al tráfico rodado del denominado CAMINO DE VILLANUEVA DE LA TORRE A MECO , que comunica ambas poblaciones y frente a la inactividad de dicha administración en orden a la reapertura del Tráfico rodado del citado camino compartido por ambos Municipios , revocando , derogando , cesando o modificando la actuación municipal que motivó el impedimento físico del tránsito de vehículos por el mismo, anulando los actos impugnados ; y condenado , en pretensión de plena jurisdicción , al Ayuntamiento demandado a la reapertura del tráfico rodado del citado camino que comunica ambas poblaciones “

Cuarto.- Dado traslado de la demanda y del expediente administrativo a la administración demandada para que la contestara en el plazo legal, así lo verificó por medio de escrito en el que, tras exponer los hechos y alegar los fundamentos de derecho que estimaba de aplicación, terminó suplicando que se dicte sentencia desestimando el recurso, estableciendo la plena procedencia de las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Meco.

Quinto.- Se fijó la cuantía del recurso como indeterminada y se acordó recibirlo a prueba con el resultado que consta en autos, tras lo cual se dio a las partes el trámite de conclusiones escritas en el que cada una de ellas de forma sucesiva formuló con carácter definitivo las que tuvo por conveniente en apoyo de sus pretensiones, luego de lo cual quedaron los autos conclusos para sentencia.

Sexto.- En la tramitación de este procedimiento se han observado todos los trámites y plazos legalmente previstos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Es objeto del presente recurso dilucidar si es conforme a Derecho la actividad llevada a cabo por el Ayuntamiento demandado consistente en limitar mediante el correspondiente acuerdo municipal el tráfico rodado en el camino rural que comunica las poblaciones de **VILLANUEVA DE LA TORRE Y MECO**.

La parte actora basa su demanda en afirmar que el camino que figura en planos catastrales desde 1928, fue reformado y trazado nuevamente por el Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), Organismo Autónomo del Estado, a fin de llevar a cabo la concentración parcelaria de la zona efectuada en 1961 y dar salida a las fincas de reemplazo.

Fue utilizado por los vecinos desde hace muchos años , primero como tránsito de personal y animales y posteriormente acondicionado para el tráfico rodado , tras ser asfaltado en 1997, por los Ayuntamientos litigantes, en la parte que a cada uno le correspondía.

Este es el uso que ha tenido el camino hasta que fue interrumpido su tránsito en el límite del término de Meco por decisión unilateral del ayuntamiento demandado, en 2006 , que limitó el paso a peatones, bicicletas, vehículos y maquinaria agrícola, limitando su uso exclusivo a vecinos propietarios de fincas y negocios existentes.

El argumento fundamental de la parte actora es que el indicado camino fue construido por el IRYDA y que el mismo es de uso público, sin que esté dentro de las competencias de la administración demandada interrumpir el tránsito general del mismo de forma unilateral.

Afirma también que se han efectuado requerimientos al ayuntamiento demandado siendo estudiado el tema por la Diputación de Guadalajara y , defensora del Pueblo de Castilla la Mancha, a fin de que se procediese a reabrir el camino al tráfico rodado, siendo el último de los requerimientos el efectuado por el Ayuntamiento demandante en 15.10.12 (folio 56 del expediente), cuya falta de respuesta es el origen del presente proceso.

Para centrar el tema objeto de debate conviene hacer referencia a que lo que está en discusión es si la administración demandada ha actuado o no conforme a Derecho, en cuanto a la adopción de medidas que impiden el tráfico rodado limitándolo conforme se ha relatado, utilizando bloques de hormigón , zanjás y otras medidas coactivas para impedir el libre tránsito de vehículos por el camino.

III.- No es cuestión controvertida que los caminos vecinales son bienes de dominio público conforme a lo establecido al efecto en los arts. 3.1, 70 a 72 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio y art. 82 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y son bienes demaniales de los municipios conforme se deduce del Reglamento de Bienes (art. 3.1), TRRL (art. 4), así como el art. 344 del Código Civil.

IV.- Debe hacerse referencia también a los artículos (25 d) y 84 de de Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases del Régimen Local (LBRL).

Dispone el art. 25.2.d del LRBRL 7/1.985 de 2 de abril que "Los Municipios tienen competencias para la ordenación, gestión ejecución y disciplina urbanística; promoción y gestión de viviendas; parques y jardines; pavimentación de vías públicas urbanas y conservación de caminos y vías rurales"

Conforme ha establecido el TSJ de Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 2ª, en sentencia de 16-10-2013, nº 1306/2013, rec. 267/2012, el art 3 RBCL en relación con el art. 25.2,d) de la Ley 7/85 de 2 de abril, atribuyen a los municipios las funciones de conservación de los caminos rurales. Toda conservación implica intrínsecamente la regulación del uso de aquello que se trata de conservar, mediante actos de tutela y defensa, porque sostener lo contrario sería llevar al absurdo la función de conservación, sin medios para ejercitarla. La laguna legal existente respecto de la competencia municipal para ordenar y regular el tránsito por caminos rurales, se debe sin duda a que tanto la Ley de Carreteras como la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial excluyen los caminos rurales por no estar destinados al tráfico ni a la circulación de vehículos a motor, ya que tradicionalmente los caminos rurales sirven para acceder a las fincas rústicas, sin que se circule por aquellos más que el tramo imprescindible desde la carretera hasta la entrada de cada predio. Por tanto, a falta de regulación legal específica hemos de acudir no sólo a la interpretación lógica sino además a la aplicación analógica de acuerdo con lo dispuesto en el art. 4 C.C. EDL 1889/1, y aplicar el art. 84 de la Ley 33/2003 de 3 noviembre EDL 2003/108869 reguladora del Patrimonio de las Administraciones Públicas a pesar de que se trate de precepto no incluido en la Disposición Final Segunda, de acuerdo con lo dispuesto en su art. 2. Dicho precepto, literalmente dispone que:

"Nadie puede, sin título que lo autorice otorgado por la autoridad competente, ocupar bienes de dominio público o utilizarlos en forma que exceda el derecho de uso que, en su caso, corresponde a todos".

En el sentido expuesto cabe hacer especial referencia a la STSJ Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo de 18 noviembre 2010 , EDJ 2010/340241:

"TERCERO.- Analizando en primer lugar la falta de competencia del Municipio para regular el uso de los caminos rurales, ha de ser rechazada por las razones siguientes:

Dispone el art. 25.2.d del LRBRL 7/1.985 de 2 de abril que "Los Municipios tienen competencias para la ordenación, gestión ejecución y disciplina urbanística; promoción y gestión de viviendas; parques y jardines; pavimentación de vías públicas urbanas y conservación de caminos y vías rurales"

Dicho precepto no debemos ponerlo en relación con los arts 36 a 41 de la Ley de Carreteras 25/1988 de 29 de julio EDL 1988/12663 ; y el Real Decreto Legislativo 339/90 de 2 de marzo EDL 1990/12827 que aprobó el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, por cuanto éstas Normas tienen objeto y finalidad distinto de aquél.

Si bien ninguno de los preceptos anteriormente citados atribuye expresamente al Municipio competencia para la ordenación y el control del tráfico en los caminos rurales, aquella deriva directamente de la interpretación lógica del art. 3 RBCL en relación con el art. 25.2,d) de la Ley 7/85 de 2 de abril EDL 1985/8184 , que atribuyen a los municipios las funciones de conservación de dichos caminos. Toda conservación implica intrínsecamente la regulación del uso de aquello que se trata de conservar, mediante actos de tutela y defensa, porque sostener lo contrario sería llevar al absurdo la función de conservación, sin medios para ejercitarla. La laguna legal existente respecto de la competencia municipal para ordenar y regular el tránsito por caminos rurales, se debe sin duda a que tanto la Ley de Carreteras como la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial excluyen los caminos rurales por no estar destinados al tráfico ni a la circulación de vehículos a motor, ya que tradicionalmente los caminos rurales sirven para acceder a las fincas rústicas, sin que se circule por aquellos más que el tramo imprescindible desde la carretera hasta la entrada de cada predio. Por tanto, a falta de regulación legal específica hemos de acudir no sólo a la interpretación lógica sino además a la aplicación analógica de acuerdo con lo dispuesto en el art. 4 C.C. EDL 1889/1, y aplicar el art. 84 de la Ley 33/2003 de 3 noviembre EDL 2003/108869 reguladora del Patrimonio de las Administraciones Públicas a pesar de que se trate de precepto no incluido en la Disposición Final Segunda, de acuerdo con lo dispuesto en su art. 2. Dicho precepto, literalmente dispone que:

"1. Nadie puede, sin título que lo autorice otorgado por la autoridad competente, ocupar bienes de dominio público o utilizarlos en forma que exceda el derecho de uso que, en su caso, corresponde a todos.

2. Las autoridades responsables de la tutela y defensa del dominio público vigilarán el cumplimiento de lo establecido en el apartado anterior y, en su caso, actuarán contra quienes, careciendo de título, ocupen bienes de dominio público o se benefician de un aprovechamiento especial sobre ellos, a cuyo fin ejercitarán las facultades y prerrogativas previstas en el art. 41 de esta ley.

3. Las concesiones y autorizaciones sobre bienes de dominio público se regirán en primer término por la legislación especial reguladora de aquéllas y, a falta de normas especiales o en caso de insuficiencia de éstas, por las disposiciones de esta ley".

De la redacción literal del párrafo 2 del transcrito precepto se deduce sin duda que las autoridades competentes para la conservación del dominio público, lo son asimismo, para la

vigilancia y regulación de los usos comunes y de los aprovechamientos especiales, por lo que hemos de concluir la competencia del Municipio para regular los usos de los caminos rurales, que son distintos de la ordenación del tráfico rodado en carreteras. "Por la carretera se circula; el camino rural se usa". En conclusión hemos de rechazar la alegada falta de competencia municipal para la regulación del uso de los caminos rurales.

CUARTO.- Por lo que se refiere a la vulneración del principio de igualdad establecido en el art. 14 C.E. EDL 1978/3879, ha de ser rechazado asimismo, toda vez que la igualdad consiste precisamente en tratar de forma desigual a quienes son desiguales; y por tanto, no constituye actuación discriminatoria exigir autorizaciones a quienes lleven a cabo un uso tan intensivo del dominio público, que exceda del normal, como preceptúan los arts. 75 y ss. del RBCL en relación con el art. 8 RSCL que "autoriza a las Corporaciones a sujetar a los administrados al deber de obtener previa licencia en los casos previstos en la Ley y otras disposiciones generales".

"En la utilización de los bienes de dominio público se considerará:

Uso común, el correspondiente por igual a todos los ciudadanos indistintamente, de modo que el uso de unos no impida el de los demás interesados, y se estimará:

General, cuando no concurran circunstancias singulares.

Especial, si concurrieran circunstancias de este carácter por la peligrosidad, intensidad del uso o cualquiera otra semejante.

Uso privativo, el constituido por la ocupación de una porción del dominio público, de modo que limite o excluya la utilización por los demás interesados.

Uso normal, el que fuere conforme con el destino principal del dominio público a que afecte.

Uso anormal, si no fuere conforme con dicho destino.

El uso común general de los bienes de dominio público se ejercerá libremente, con arreglo a la naturaleza de los mismos, a los actos de afectación y apertura al uso público y a las leyes, reglamentos y demás disposiciones generales.

El uso común especial normal de los bienes de dominio público se sujetara a licencia, ajustada a la naturaleza del dominio, a los actos de su afectación y apertura al uso público y a los preceptos de carácter general.

Las licencias se otorgaran directamente, salvo si por cualquier circunstancia se limitare el número de las mismas, en cuyo caso lo serán por licitación y, si no fuere posible, porque todos los autorizados hubieren de reunir las mismas condiciones, mediante sorteo.

No serán transmisibles las licencias que se refieran a las cualidades personales del sujeto o cuyo número estuviere limitado; y las demás, lo serán o no según se previera en las ordenanzas."

En el supuesto que nos ocupa de uso de los caminos rurales, nos encontramos por un lado, el uso común que es el que generalmente se ejercita para las labores agrícolas que es el uso natural o tradicional para el que existen los caminos rurales; por tanto, entiende la Sala que la regulación de los distintos usos que lleva a cabo la Ordenanza impugnada es congruente y proporcional con su motivo y finalidad que no son otros que conservar los caminos rurales, por tratarse de una función encomendada por Ley; implicando dicha conservación, que se impongan condiciones, límites y restricciones a los usos de carácter industrial por no ser los propios y naturales de los caminos rurales implican un uso tan intensivo de los caminos, que excede el uso normal común de los mismos, y se convierte en un uso común especial, que como hemos visto, está sujeto a autorización administrativa, ajustada a la naturaleza de la intensidad del uso, que implica un mayor deterioro de los caminos, que conlleva necesariamente una mayor y costosa labor de conservación.”

En el proceso que acabamos de referir lo que se estaba impugnando era la regulación del uso en un camino rural y la Sala lo confirma como competencia del municipio reconociendo la competencia municipal para regular el uso de los caminos rurales en su término municipal.

Estos criterios han sido confirmados en casación por el Tribunal Supremo Sala 3ª, sec. 4ª, S 11-2-2014, rec. 744/2011

En igual sentido la TSJ de Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 2ª, S 29-11-2012, nº 1652/2012, rec. 467/2009

V.- En el caso que nos ocupa se ha producido una decisión unilateral por parte de uno de los ayuntamientos propietarios del camino y esta decisión no cabe duda de que entra dentro del ámbito de sus competencias, al tratarse de un camino rural que transita por el término municipal y en cuanto no exceda del mismo, decisión que tiene una repercusión inmediata en el tráfico rodado que no sea de personas, bicicletas, automóviles de propietarios de terrenos a los que se accede a través del camino o de maquinaria agrícola.

Se está dando al camino un uso normal que es precisamente para el que se construyó, que es el de comunicación entre fincas agrícolas de reemplazo que fueron definidas mediante una concentración parcelaria llevada a cabo por el Estado.

El tráfico de automóviles no puede imponerse sin el consentimiento de los dos municipios cuando se trata de caminos rurales como el que se analiza en este proceso, sin que sea posible que, sin que se haya discutido el uso tradicionalmente agrícola del camino, este se convierta, de hecho, por su utilización, en una carretera.

Además, se trata de dar solución a un problema de acceso a la N-II y a la Autovía de los Vecinos de Villanueva, que utilizan el camino como atajo atravesando el núcleo rural de Meco, para evitar el trayecto más largo que debe efectuarse necesariamente por carretera.

No hay vía de hecho porque el acuerdo municipal de la Junta de Gobierno Local de Meco de 8.2.2006 de ordenar el tráfico rodado en un camino rural de comunicación entre fincas, ha sido adoptado y no cabe, cuando lo que se impugna es un avía de hecho y no el acuerdo en sí, que es del año 2006, alegar ahora lo que se debió de hacer en caso de impugnarse tal acuerdo en cuanto tuvo conocimiento del mismo el Ayuntamiento, es decir, la forma del acuerdo, si se debió de tramitar de una forma u otra, si se debió de dar audiencia a los interesados que necesariamente se verían afectados por el mismo etc.

El acuerdo ha sido debidamente motivado y justifica que se regule el uso del camino rural o agrícola en cuanto transcurre por el término municipal de Meco, y se refiere a las restricciones al tráfico rodado del camino.

No es posible imponer a otro municipio el uso por vehículos sin limitación alguna del camino litigioso, que hay que recordar fue construido por el Estado para comunicar las fincas de reemplazo de una concentración parcelaria.

VI.- De lo dicho anteriormente procede la desestimación del presente recurso, como indica el art. 70.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (en adelante LJCA).

VII.- No se aprecia ninguna de las circunstancias del art. 139.1 LJCA para imponer las costas del presente recurso a ninguna de las partes.

VIII.- Contra la presente sentencia cabe interponer recurso de apelación, a tenor del art. 81 LJCA, dado el carácter indeterminable de la cuantía de la pretensión del demandante.

En atención a lo expuesto y en nombre de S.M. EL REY

F A L L O

Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el **AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA TORRE**, “frente a la vía de hecho realizada por el citado Ayuntamiento de Meco, respecto al cierre al tráfico rodado del denominado **CAMINO DE VILLANUEVA DE LA TORRE A MECO**, que se describe en el primer antecedente de hecho. Sin costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtiéndoles que contra la misma cabe interponer recurso de apelación para ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid mediante escrito razonado que deberá presentarse ante este mismo Juzgado en el plazo de los quince días siguientes a dicha notificación, en el que se expondrán las alegaciones en que se funde.

Conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ, para la interposición del recurso de apelación deberá constituirse un depósito de 50 euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este órgano judicial, en Banesto, nº de cuenta 2899, bajo apercibimiento de inadmisión.

Añade su apartado 8 que en todos los supuestos de estimación total o parcial del recurso, el fallo dispondrá la devolución de la totalidad del depósito, una vez firme la resolución.

Así por esta mi sentencia, juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, doy fe.

